

San Miguel, a veinte de octubre de dos mil veintiuno

Vistos:

En estos autos I-30-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, por sentencia definitiva de treinta de julio de dos mil veintiuno, se rechazó la reclamación interpuesta por don Rodrigo Eduardo del Río Santiagos, en representación de Comercializadora Rancho Lindo SpA, en contra de la Inspección del Trabajo del Maipo – San Bernardo, representada por su Inspector provincial don Rodrigo Castillo Serrano, decretándose que la Resolución de Multa número 4296/21/14, se mantiene.

En contra de la referida resolución, doña Javiera Cavicchioli Nicolai, abogada, por la reclamante, interpone recurso de nulidad por la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, *“cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme las reglas de la sana crítica”* y, en subsidio, la causal de nulidad dispuesta en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia *“se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*.

Declarada su admisibilidad por la Sala Tramitadora de esta Corte, se procedió a la vista de la causa en la audiencia de 8 de octubre último, en la que se escucharon las alegaciones de los representantes de ambas partes.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurrente expone que la sentencia, en cuanto declara que la prueba aportada es insuficiente para derribar la presunción de legalidad que ampara a los funcionarios fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, ha sido dictada con infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, contrariando el sentenciador fundamentalmente los principios de la lógica.

Precisa que en este caso se ha vulnerado el principio de la razón suficiente, al apreciar erróneamente las pruebas documentales y testifical, y concluir hechos contrarios a los que naturalmente emanan de dichos medios probatorios. Refiere la declaración de la testigo Andrea Massri y el comprobante de pago de



cotizaciones previsionales correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, emitidos por la Mutual de Seguridad CChC, como elementos que acreditan que las personas respecto de las cuales se solicitó documentación en el proceso de fiscalización no son ni fueron en momento alguno trabajadores de la empresa reclamante.

Explica que el sentenciador, al afirmar que la única prueba aportada para acreditar que los supuestos trabajadores contenidos en la multa no son parte de la empresa fue la declaración de un testigo que resultó ser su gerenta, omite gravemente parte de la prueba aportada en juicio y el contenido mismo de la declaración del testigo, quien no se desempeña en dicho cargo, sino como asistente de gerencia.

Alude a la cadena de correos electrónicos incorporada en juicio, como prueba de que la documentación de fiscalización fue requerida por dicho medio en forma posterior a la visita realizada por la funcionaria de la Dirección del Trabajo, y que mediante dichas comunicaciones se informó oportunamente que Ransess Ortigoza y Jhonmary Rangel no eran trabajadores de la empresa. Antecedentes aportados que tampoco fueron considerados por el sentenciador al momento de arribar a su decisión.

Entiende que bastaba con apreciar correctamente la prueba documental incorporada en juicio para percatarse de la imposibilidad de hacer presente al momento de la fiscalización que los supuestos trabajadores señalados en la multa no eran parte de la empresa, pues la documentación respecto de éstos no fue solicitada en dicha oportunidad, sino en forma posterior. Como consecuencia de ello, se infringió el principio de razón suficiente, toda vez que cada conclusión afirmada o negada, no guardó correspondencia con un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, y no estuvo constituido por elementos aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto sobre el hecho.

Concluye que al omitir deliberadamente la prueba documental y apreciar erróneamente la declaración del testigo, concluye hechos contrarios a los que naturalmente emanan de dichos medios probatorios y, sin dar ninguna razón lógica, científica o de experiencia rechazó la reclamación de la multa.



Segundo: En forma subsidiaria, invoca la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Explica que la infracción de ley se configura por una errada interpretación de los artículos 7 y 9 del Código del Trabajo y del artículo 23 del D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Da por infringidas estas normas, por cuanto la fiscalizadora cursa la multa tras supuestamente “constatar” que el señor Ortigoza y el señor Rangel eran trabajadores de la reclamante, convicción a la que arribó con el único fundamento de encontrarse dichas personas en el local al momento de la fiscalización. Pero la norma del artículo 23, solo otorga el carácter de presunción legal a los hechos constatados directamente por los fiscalizadores, esto es, la realidad que es aprehendida directamente por los sentidos en el momento de la fiscalización. Por ejemplo, no contar con contrato de trabajo firmado, o bien, que éste se haya firmado más allá de los 15 días; o bien, que un documento laboral esté enmendado, etcétera. Pero en este caso, no se explica cómo la fiscalizadora pudo constatar que dichas personas eran trabajadores de la empresa sin requerir absolutamente ningún documento idóneo para tal efecto en dicha oportunidad, y sin que conste en los antecedentes remitidos en forma posterior.

Reprocha que la fiscalizadora realiza una calificación jurídica y no una constatación, trasgrediendo así lo dispuesto en el artículo 23 del D.F.L. 2 y los artículos 7 y 9 del Código del Trabajo, pues consta de la prueba aportada en autos que los supuestos trabajadores no prestaban servicios personales a la empresa, ni mantenían una relación de subordinación y dependencia con la misma, sino que asistían a los clientes del local de forma esporádica y discontinua, a su propia conveniencia, sin cumplir con una jornada de trabajo ni ser supervisados por un superior jerárquico, la empresa no pagaba remuneración alguna a estas personas, sino que recibían propina de los clientes.

Concluye que, al darle valor de presunción de veracidad a la infundada calificación jurídica de la fiscalizadora, la sentenciadora no interpretó correctamente las normas legales citadas, ya que dicha presunción de veracidad



no se extiende a todos los dichos o expresiones de los fiscalizadores, sino solo aquellos que hayan sido constatados en el marco de una fiscalización.

Tercero: Con respecto a la causal principal se debe tener presente, en primer lugar, que la posibilidad de revisión del tribunal *ad quem*, con respecto a la sentencia a la que se atribuya haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, es de carácter excepcional, porque no basta cualquier infracción a las reglas de la sana crítica, sino que es menester que tenga el carácter de “*manifiesta*”.

Sin perjuicio de lo anterior, lo más relevante es que se exige del recurrente el señalamiento determinado de las reglas supuestamente vulneradas, el modo en que ellas habrían sido contrariadas, los medios probatorios comprendidos en ese error, y la identificación de los hechos que cuestiona.

En este sentido, resulta notorio que las motivaciones pretextadas por el recurrente para sustentar sus alegaciones no constituyen una cuestión jurídica, sino que conciernen a aspectos fácticos. Y que el recurso carece de la fundamentación que la ley le exige en relación a la causal que ha invocado, pues en el arbitrio no se identifican, más allá de meras menciones genéricas al principio de razón suficiente, los elementos de la sana crítica que el sentenciador habría pasado a llevar en su valoración de la prueba, ni la forma en que las infracciones se produjeron.

Cuarto: No obstante, esta Corte estima que el Tribunal *a quo*, razona y fundamenta adecuadamente en el considerando cuarto del fallo, los motivos por los cuales concluye que no se acreditó el hecho en que se sustentaba la única alegación de la reclamante, que las personas por las que fue sancionada no eran trabajadores de la empresa.

La sentencia hace referencia a la prueba y la forma como la misma contribuye a formar su convicción, haciendo una adecuada relación entre los distintos medios probatorios y los hechos que tiene por acreditados y aquellos que no. En definitiva, como era carga de la reclamante acreditar que los trabajadores en cuestión no laboraban para ella.



En el considerando cuarto, la sentenciadora razona que la Resolución de Multa contiene un hecho negativo, el cual se acredita con el hecho positivo que lo descarta. Por ello, entiende que correspondía a la reclamante acreditar que los trabajadores no son parte de la empresa.

Entiende el sentenciador que la única prueba que se incorporó fue la declaración de un testigo, pero que no era suficiente señalar que los trabajadores no prestan servicios a la empresa para exonerarse del pago de una multa, ya que el mismo día de la fiscalización, la persona encargada de local debió alertar a la fiscalizadora indicándole que las dos personas que estaban frente a ella no eran trabajadores, y mostrando el libro auxiliar de remuneraciones o cualquier otro documento idóneo para efectos de acreditar que no tenía obligación de entregar documentación a tales personas, pues solo así la fiscalizadora habría tomado contacto directo con ellos para efectos de constatar esa realidad.

Por el contrario, la sentencia destaca que al momento de la fiscalización no se dijo nada, razón por la cual la fiscalizadora en su calidad de ministra de fe constató que se trataba de dos personas que trabajaban en la empresa.

Además, se considera que esas dos personas estaban autorizadas por los dueños de la empresa, para efectos de ayudar a las personas a cargar sus bolsas hacia sus autos, por lo que no se explica por qué, al menos uno de ellos, no fue presentado como testigo frente a la fiscalizadora.

Por todo lo anterior, la sentenciadora concluye que la prueba fue insuficiente para derribar la presunción de legalidad que ampara a los funcionarios fiscalizadores de la Inspección del Trabajo.

Quinto: Como se ve, la sentencia hilvana razonada y armónicamente la valoración de las pruebas incorporadas por las partes al proceso y entrega las razones por las que terminó por concluir la insuficiencia de aquella que apuntaba a sostener la teoría del caso de la reclamante.

Las motivaciones en las que la sentenciadora valora la prueba no revelan ningún tipo de infracción de los márgenes de la sana crítica, sino que, por el contrario, muestran una secuencia lógica apreciable para el lector, que



transparenta las razones que se tuvieron para arribar a las conclusiones fácticas que sostienen el fallo.

Así, las argumentaciones vertidas en el recurso en estudio evidencian más bien una disconformidad de la reclamante con la valoración efectuada por el tribunal, más no alguna infracción determinada a las reglas de apreciación de la prueba vigentes en la judicatura del trabajo. El sentenciador considera y valora las probanzas rendidas por las partes, expresando sus razonamientos al respecto, y consignando las conclusiones a las que arriba a partir de las mismas.

Sexto: En cuanto a la causal subsidiaria, la sentencia impugnada, en su considerando cuarto, asienta como hecho de la causa que al momento de la fiscalización, nada se dijo a la funcionaria acerca que los dos trabajadores en cuestión no pertenecían al personal de la empresa. Por esta razón, en su calidad de ministra de fe de acuerdo con el DFL 2 de 1967, constató que se trataba de dos personas que trabajaban en la empresa y a quienes no se les hizo entrega del ejemplar del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

A partir de este dato fáctico, apreciado directamente por la fiscalizadora, la sentenciadora concluye que era carga de la reclamante destruir o controvertir el hecho observado, aportando los antecedentes necesarios para dar sustento a lo alegado en el reclamo en cuanto a que no correspondían a trabajadores de la empresa. En este orden de ideas, la única prueba aportada en autos fue la declaración de una empleada quien afirmó ser la mano derecha del dueño, y que la fiscalizada tenía 180 o 190 trabajadores, por lo que llevaba un libro auxiliar de remuneraciones y también tienen una nómina de los trabajadores que se desempeñan en ella.

Luego, no resulta extraño que en el fallo se consideraran insuficientes los antecedentes aportados en sustento del reclamo, pues la prueba rendida importaba la contraposición de la declaración de una testigo, con la apreciación directa de la funcionaria pública, cuyas aseveraciones, plasmadas en la correspondiente acta y reflejadas en el acto administrativo sancionatorio, gozan de presunción de legalidad, por lo que para derribarla es necesario presentar más antecedentes que los allegados al proceso por la reclamante.



Ante tal escenario, la sentenciadora no podía más que preferir la versión sustentada por la presunción, y debido a ello, no puede considerarse que el fallo infrinja el artículo 23 del DFL 2 de 1967.

Séptimo: Tampoco se aprecia infracción de los artículos 7 y 9 del Código del Trabajo, porque la primera de estas normas consagra lo que se ha de entender por contrato individual de trabajo y sus elementos definitorios. Así, en la especie ocurrió que la sanción aplicada a la reclamante se basó en el hecho de haber dos personas que, aparentemente, prestaban servicios para la empresa, y frente a tal constatación, correspondía a la recurrente probar lo contrario. Es decir, que estas dos personas no tenían una relación laboral con la empresa, para lo que contaba con todas las posibilidades probatorias que entrega el procedimiento laboral.

Frente a esta carga, la reclamante no aportó prueba suficiente, limitándose a presentar la declaración de un testigo, en circunstancias que existían múltiples alternativas probatorias, como acompañar el libro de remuneraciones, la nómina de trabajadores de la empresa o, incluso, hacer comparecer a estas mismas personas para que explicaran la situación. En consecuencia, al no haber satisfecho la carga probatoria que pesaba sobre ella, la reclamante no logró desvirtuar el hecho en que se asentaba la sanción y, en consecuencia, no puede entenderse vulnerada la norma en comento.

Con respecto al artículo 9, ocurre que se trata de una norma que contiene obligaciones formales para los empleadores, y que tienen una ratio que se vincula con la facilitación de la prueba de la existencia de una determinada relación laboral al exigir la escrituración de los contratos de trabajo dentro de determinado plazo. Luego, no se ven razones para estimar infringida la norma en comento.

En definitiva, no se configura la causal en estudio por cuanto ninguna de las normas que se alegan como infringidas en el libelo, eran aplicables para decidir el conflicto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 474, 479, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por el apoderado de la parte reclamante, en contra



de la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, dictada en los autos RIT I-30-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, la que no es nula.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante José Ramón Gutiérrez Silva.

N°412-2021 Laboral.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señora Carmen Gloria Escanilla Pérez, señora María Patricia Salas Saez y el abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.

Se deja constancia que no firma la ministra María Patricia Salas Sáez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por por estar realizando visita del Juzgado de Familia de Peñaflor, en su calidad de Ministra Visitadora, modalidad zoom.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por Ministra Carmen Gloria Escanilla P. y Abogado Integrante Jose Ramon Gutierrez S. San miguel, veinte de octubre de dos mil veintiuno.

En San miguel, a veinte de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.